Globethics Repository



Colombia

This page was generated automatically upon download from the Globethics Repository. More information on Globethics see https://www.globethics.net. Data and content policy of Globethics Repository see https://repository.globethics.net/pages/policy.

Item Type	Article
Authors	Camacho Guizado, Alvaro
Publisher	Fundación Friedrich Ebert (FES)
Rights	Creative Commons Copyright (CC 2.5)
Download date	2026-11-04 17:52:31
Link to Item	http://hdl.handle.net/20.500.12424/219454

Nueva Sociedad Nro. 149 Mayo-Junio 1997, pp. 27-41

Colombia. Panorama y paradojas de sus conflictos

Alvaro Camacho Guizado

Alvaro Camacho Guizado: profesor investigador del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales - IEPRI, de la Universidad Nacional de Colombia, Bogotá.

Palabras clave: conflicto social, actores sociales, violencia polìtica, Colombia.

Resumen:
En Colombia, desde hace décadas prima la carencia de mecanismos sociales y legales de tramitación y concertación de contradicciones y pugnacidades que permitan la resolución de conflictos, y que los contendores puedan convertirse en competidores. La ausencia de estas mediaciones es una de las claves que nos permite comprender por qué en este país se presenta tal cúmulo de dificultades de tramitación de conflictos y por qué a la vez éstos tienden a rebasar sus ámbitos específicos y a expresarse de maneras cruentas y fuera de control.

En un reciente libro, Marco Palacios ha estudiado un largo siglo de nuestra historia para concluir que la Colombia de los últimos cincuenta años se caracteriza por los múltiples conflictos producidos por el divorcio entre las demandas de una sociedad dinámica, pero violenta, y una política y arreglos institucionales fosilizados que no han podido darle respuestas[1]. Las derivaciones empíricas de esta hipótesis exigen el análisis de los conflictos sociales centrales del país, y para ello se debe partir de la indagación sobre la naturaleza y la dinámica de los mismos y sus perspectivas de manejo y/o resolución.

En lo que respecta a su naturaleza, en el estudio de los conflictos se hace necesario determinar los actores, los campos centrales en los que se organizan y los temas que los enfrentan. En cuanto a la dinámica, interesan los mecanismos que los activan o les impiden aflorar, sus expresiones, intensidades, eventuales resultados y las nuevas configuraciones sociales que así se forjan. En estas notas pretendo hacer un somero inventario de algunas de las más conspicuas pugnacidades que caracterizan a la sociedad colombiana de hoy, con la expectativa de contribuir a una incesante y rica discusión académica. Tal inventario irá acompañado por unas breves

[1] Marco Palacios: Entre la legitimidad y la violencia. Colombia 1875-1994, Editorial Norma, Bogotá, 1995.

anotaciones teóricas que simplemente han tenido el propósito de servirme para clarificar mis propias ideas. Es decir, no tengo pretensión alguna ni de hacer un marco teórico a la usanza de trabajos universitarios, ni de forzar lo empírico a los requerimientos de una elegante ***esoterie*** conceptual.

La naturaleza y dinámica de los conflictos

En principio, los conflictos pueden ser vistos como confrontaciones entre dos actores preexistentes y reconocibles que pugnan por hacer valer sus intereses o identidades. En este sentido las tradiciones clásicas marxista y weberiana en las ciencias sociales se construyeron sobre teorizaciones relativas a las contradicciones entre capitalistas y trabajadores, o entre gobernantes y gobernados.

Pero existen también conflictos «multiactorales», que pueden tener varios contendores diferenciables en cualquiera de los polos de la confrontación. Las guerras entre naciones en las que se construyen alianzas precarias y sólo para la lucha, aunque en seguida puedan desentrañar diferencias irreconciliables, son una ilustración típica de esta modalidad. Otro tanto puede decirse de las réplicas nacionales en las luchas partidistas o de las crisis políticas en las que los juegos de alianzas e intereses se configuran a partir de metas inmediatas, intereses estratégicos o jugadas tácticas que se pueden modificar al vaivén del momento.

Es necesario considerar también aquellos conflictos que por su misma naturaleza construyen actores: éstos se gestan justamente en el proceso del conflicto. El sentido de esta forma de conflicto se comprende cuando se examinan los procesos en los que grupos sociales que por su naturaleza o papel en la sociedad no tienen una identidad de sí mismos –porque no comparten sentidos e intereses comunes objetivamente explícitos y reconocibles– adquieren tal identidad a partir de su inserción en los conflictos. Así se convierten en actores. Si bien de su situación no se deduce necesariamente que tengan contradicciones no resueltas con otros, situaciones particulares los convierten en actores, aunque los campos en los que se confrontan no configuren contradicciones estructurales. Como espero mostrarlo más adelante, este es el caso de algunos de los conflictos más intensos que signan a la sociedad colombiana.

En principio, los campos de gestación y expresión de los conflictos pueden ser instituciones existentes, como los Estados, las religiones, la propiedad, la nacionalidad o la territorialidad. Sin embargo, también pueden gestarse pugnas en torno de procesos sociales no organizados formalmente, como la ecología o el género. Desde luego pueden expresarse con cierta profundidad y afectar instituciones: el punto para dilucidar consiste en la precisión del espacio en donde se producen, sus posibilidades de extensión a otros ámbitos y el grado

en que pueden afectar el desempeño de una o varias instituciones de la sociedad.

Un campo adicional de conflicto es el que se gesta en torno de lo que Marx llamó «intereses cívicos generales», y que enfrentan a demandas ciudadanas que reivindican, defienden o exigen consumos colectivos, con administraciones estatales ineficientes[2]. El tema del conflicto no es del todo el tipo de dominación que se ejerce mediante el control del Estado. Es más claramente una confrontación con la dimensión administrativa del mismo.

Los campos pueden manifestarse además en conflictos ligados a coyunturas particulares y que bien pueden involucrar a actores «estructuralmente determinados», pero que se configuran y desatan a partir de la naturaleza misma del momento.

Los temas de los conflictos: estrategias e identidades. Otro elemento que define la naturaleza de los conflictos son los temas o las reivindicaciones en juego. La moderna teoría sociológica de los movimientos sociales aporta claves de aproximación. En efecto, mientras la sociología clásica abordó el tema del conflicto a partir del examen de intereses estratégicos clasistas diferenciales que surgen cuando los vehículos institucionales de expresión no aportan salidas viables a sus expresiones, algunos teóricos recientes se mueven en torno de otros campos de gestación de esas reivindicaciones. Así, están los conflictos organizados alrededor de lo que se ha venido a llamar «nuevos movimientos sociales»[3]. Según un número creciente de sociólogos, este tipo de conflictos tiende, en particular en las sociedades más avanzadas, a convertirse en la clave del nuevo orden social, y ha contribuido a desplazar el foco de los conflictos de estrategias clásicos[4]. Su principal característica es que surgen en

---

[2] Karl Marx: «El Dieciocho Brumario de Luis Bonaparte» en ***Obras Escogidas*** (Tomo I), Moscú, s/f.

[3] Las teorizaciones del conflicto se pueden asimilar a las de los movimientos sociales en cuanto éstos son vehículos de expresión de aquéllos. La diferenciación consistiría en que los movimientos pueden mantener latentes los conflictos, o tramitarlos por vías pacíficas, así tiendan a romper el orden específico en el que actúan, en tanto que los conflictos no tramitados se convierten en «luchas negativas». Cf. Alain Touraine: «An Introduction to the Study of Social Movements» en ***Social Research*** vol. 52 Nº 4, invierno 1985. La literatura sobre el carácter «novedoso» de algunos movimientos sociales es abundante. Es probable que lo verdaderamente novedoso sea el proceso de gestación y articulación de ideologías «movimientistas», tanto en la teoría sociopolítica como en los discursos de agitación y movilización de sectores de la población que hoy pugnan por realizar políticamente sus identidades. Ver, por ejemplo, Ernesto Laclau: «New Social Movements and the Plurality of the Social» en ***Latin American Studies*** Nº 2, 1985; Tilman Evers: «Identidad: la faz oculta de lo nuevos movimientos sociales en América Latina» en ***Procesos y políticas sociales: Revista de Trabajo Social*** Nº 24***,*** Bogotá, 1986; Arturo Escobar y Sonia Alvarez (eds.): ***The Making of Social Movements in Latin America***, Westview Press, Boulder, ***1992.***

[4] Ver en particular los trabajos de Alain Touraine: ***La voix et le regard***, Editions du Seuil, París, 1978; «Les mouvements sociaux: object particulier ou probleme central de l'analyse sociologique?» en ***Revue Francaise de Sociologie*** vol. 25, 1984; Jürgen Habermas: «New Social Movements» en ***Telos*** Nº 49, otoño de 1981; Jean L. Cohen: «Strategy or Identity: New

función de las reivindicaciones de identidades particulares de grupos sociales. Antes que reivindicar intereses estratégicos clasistas, y por lo mismo instrumentales, persiguen consolidar intereses estratégicos, pero de orden más expresivo que instrumental. La construcción de identidades es justamente un interés de este tipo.

Los conflictos de intereses clasistas

Surgen en la medida en que sectores sociales buscan hacer valer los intereses que emanan de su ubicación y papel en la estructura social y en la división social del trabajo, para lo que movilizan recursos alternativos a los previstos por las instituciones respectivas y con los cuales buscan tener mayor eficacia frente al entrabamiento y las resistencias interpuestas por las contrapartes; su vigencia depende de la capacidad de los arreglos legales –formales– para darles cabida en su seno y tramitar los intereses y divergencias instrumentales de que se trate. Por esta razón, a mayor cierre de los canales institucionales, mayor será la virulencia del conflicto. Las expresiones más relevantes de este tipo de conflictos en Colombia son los movimientos obrero y sindical y el campesino.

El conflicto obrero y sindical. Si se quisieran sintetizar las características más sobresalientes de la «cuestión obrera» o la «cuestión sindical» en Colombia, habría que decir que el país presenta una bajísima y decreciente tasa de sindicalización –de alrededor del 6,9% de la fuerza laboral en 1993[5]–, que los acelerados procesos de informalización y de contratación indirecta dificultan la organización obrera, que más de la mitad del empleo en general está constituido por trabajadores informales, que la apertura económica ha propiciado la desaparición de empleos en algunas ramas de la industria, que las prácticas equívocas de las centrales sindicales operan como un obstáculo adicional al incremento de afiliaciones, que los mecanismos tradicionales de confrontación con las patronales –hoy día fuertemente institucionalizados– no ofrecen alternativas novedosas a los potenciales candidatos a afiliados:

> Las tácticas de confrontación cerrada realizadas por el sindicalismo no confederado durante el Frente Nacional van quedando atrás, sin ser sustituidas por una eficaz capacidad de respuesta a las políticas oficiales y a las prácticas patronales. Hay un claro desfase entre las cambiantes circunstancias laborales y las acciones sindicales. Los procesos económicos de reestructuración del mundo laboral (flexibilización de la mano de obra, nuevas formas de organización de la producción, privatización y desmonte de políticas sociales) no han sido respondidas eficaz y coherentemente por los trabajadores. Es cierto que en muchos casos el sindicalismo ofrece alternativas razonables de negociación, pero esto sucede en un nivel micro

---

Theoretical Paradigms and Contemporary Social Moventents» en ***Social Research*** vol. 52 Nº 4, invierno de 1985.

[5] Los datos de esta sección provienen en su mayoría de Mauricio Archila: «Tendencias recientes de los movimientos sociales» en Francisco Leal (comp.): ***En busca de la estabilidad perdida. Actores políticos y sociales en los años noventa***, Tercer Mundo-IEPRI-Colciencias, Bogotá, 1995. Ver también el trabajo de Rocío Londoño: «Problemas laborales y reestructuración del sindicalismo» en Francisco Leal y León Zamose (eds.): ***Al filo del caos. Crisis política en la Colombia de los años 80***, Tercer Mundo-IEPRI, ***Bogotá***, 1990, pp. 275, ss.

y para una minoría de sindicatos, generalmente en los que tienen presencia trabajadores más calificados. Pero en su conjunto los sindicatos y, más grave aún, las centrales, no están preparados para ofrecer alternativas viables a los procesos de reestructuración del mundo laboral, y se limitan a brindar respuestas de rechazo por principio o rápidas negociaciones que desconocen el sentir de los trabajadores representados.[6]

Además de esas características internas y del funcionamiento de la economía colombiana, al movimiento sindical lo signa el que no ha estado por fuera de la confrontación entre el Estado y las guerrillas, y que esta yuxtaposición de conflictos se ha traducido en un enfrentamiento mayor en el cual el perdedor es justamente el obrero. De una parte, la penetración de organizaciones guerrilleras en las estructuras sindicales ha significado el desplazamiento de reivindicaciones y negociaciones de orden laboral a otras demandas asociadas con los intereses de la lucha armada insurgente. Aunque el caso más notable se ha dado en Urabá, otras organizaciones sindicales han estado sumidas en ese torbellino. De otra, la consecuencia previsible, la guerra sucia, se ha traducido en violaciones de los derechos humanos y laborales, asesinatos selectivos de dirigentes, masacres de trabajadores, y en una tendencia a la estigmatización generalizada del movimiento sindical por parte de los empleadores y sus ideólogos. El intento de superar el ***tradeunionismo*** por la vía del vicariato de la lucha armada ha sido profundamente perjudicial para el movimiento sindical.

El grueso de la actividad sindical conflictiva se concentra en empresas ligadas de una u otra manera al Estado. Los trabajadores de la salud, la educación y los servicios públicos componen la mayoría de las movilizaciones huelguísticas, con la particularidad de que las interrupciones en las –actividades involucran a la población ajena al conflicto. En estas condiciones, los conflictos construyen a la opinión pública como una tercería en discordia que se convierte en objeto de seducción o manipulación por cualquiera de las partes para gestionar una presión a su favor[7], sin que, sin embargo, se logre la superación y politización de los movimientos.

El examen de la cuestión obrera desentraña así una notable paradoja: la situación sindical y de la huelga como institución transitoria de trámite de conflictos ha entrado en una peligrosa ruta de ambigüedades paralela a las crecientes dificultades de los mecanismos ordinarios de su tramitación y al hecho aparente de que los conflictos laborales pierden peso en el conjunto de la conflictividad en el país. Las políticas más recientes del Estado y el

[6] Archita: ob. cit.

[7] En la historia reciente de las movilizaciones de este tipo los logros y derrotas se han venido repartiendo de una manera errática. El intento de privatización de Telecom por parte del presidente Gaviria mostró cómo un manejo habilidoso y razonable por parte del sindicato pudo ganar apoyo de al menos algunos sectores de la opinión pública y echar para atrás la política gubernamental. Por el contrario, los constantes paros y protestas de los trabajadores portuarios, unidos a los evidentes privilegios logrados con la cooperación del elientelismo político-patronal, se tradujeron en que el último movimiento se concentró en negociar la privatización de la empresa, y con ella la desaparición de la organización.

debilitamiento de las organizaciones sindicales han profundizado este proceso, en el que la confrontación ha sido sustituida de forma creciente por la concertación y la obediencia, con la consecuencia de que al tiempo que limita las perspectivas de los conflictos, coloca a las reivindicaciones obreras en manos de entidades que no son del todo representativas de los intereses de los trabajadores[8].

El conflicto campesino. El campesinado colombiano expresa una situación verdaderamente compleja y contradictoria: por un lado, se encuentra en el ojo del huracán de las expresiones más crudas y cruentas de los conflictos; por otro, sus acciones como movimiento articulador de un conflicto de estrategias por intereses propios no se corresponden con su situación.

En efecto, un conflicto campesino tendría que desarrollarse en principio en torno de reivindicaciones como la tierra, el trabajo, el crédito o las facilidades de producción y comercialización de productos. Pues bien, a partir de la casi completa destrucción de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos en la década de los 70, luego de que el campesinado viviera uno de sus momentos de mayor actividad reivindicativa de sus intereses, la situación ha dado un vuelco radical. Tales reivindicaciones prácticamente han pasado a una escena secundaria, a pesar de que las demandas de aquel momento se mantienen en plena vigencia[9]. Parecieran también ser episodios para el recuerdo las marchas campesinas de finales de la década de los 80, cuando las movilizaciones masivas llegaron a cubrir una buena parte del país.

La sustitución de la reforma agraria redistributiva por las políticas de productividad, renta presunta e intangibilidad de la propiedad terrateniente, emanadas del Pacto de Chicoral (1970), y la posterior aplicación de las inspiradas en Desarrollo Rural Integrado (1975), el auge de la agricultura comercial y los subsidios a la expansión ganadera. convirtieron a la redistribución de la tierra en un programa subsidiario y de menor alcance. De hecho, la ley que renueva los programas de reforma agraria aún espera su reglamentación.

Esta debilidad de los movimientos campesinos se explica por el hecho de que se encuentran sumidos en otro tipo de confrontaciones que acallan sus propios intereses. Tal es la creciente penetración de nuevos capitales al campo mediante la compra o expropiación violenta de tierras por parte de capitalistas narcotraficantes[10]. Las secuelas obligadas de este proceso han sido el

---

[8] Situaciones como ésta han hecho reconocer a Barrigton Moore que, en términos de sus tendencias a la burocratización y expropiación de intereses de sus afiliados, los partidos son a los movimientos políticos lo que los sindicatos son a los movimientos obreros. Cf. ***Injustice. The Social Bases of Obedience and Revolt, M. E.*** Sharpe, New York, 1978.

[9] Sobre el tema, ver León Zamosc: «El campesino y las perspectivas para la democracia rural» en Buitrago y Zamose (comps.), ob. cit., pp. 311 y ss.

[10] Véanse al respecto los trabajos de Alejandro Reyes Posada y Alfredo Molano.

desplazamiento masivo forzoso[11]. la ampliación de la frontera agrícola por la colonización y, también muy notable, la organización de grupos paramilitares.

El paramilitarismo. Este es el caso típico del actor construido por el conflicto: no responde a intereses propios del «actor» tradicional, el campesinado, sino justamente a sus enemigos más cercanos: los terratenientes y quienes de alguna manera se ven afectados por las reivindicaciones campesinas.

Las evidencias más confiables indican que hay dos clases de paramilitares en el país: de una parte están las pequeñas organizaciones de «vigilantes» locales, al servicio de terratenientes individuales o agrupados en regiones. Tienen por lo mismo escasa cobertura territorial, mayor independencia y se limitan a prestar servicio de protección y eliminación de indeseables locales. Son, por así decirlo, versiones rurales del sicariato. Y están también las organizaciones armadas de cobertura nacional o regional, que responden a mandos relativamente centralizados y con una perspectiva política de extrema derecha en proceso de construcción y consolidación. Son verdaderas hordas blancas que cumplen el papel de ampliar, proteger y «limpiar» la gran propiedad, y que en este proceso se enfrentan a otros campesinos, sean pequeños propietarios, colonos o asalariados agrícolas. Surgidas con apoyo estatal como mecanismo de autodefensa local frente a abusos guerrilleros, muy rápidamente desbordaron sus propósitos y han llegado a convertirse en ejércitos activos que rebasan los límites de lo local.

Los cultivos ilícitos. El creciente proceso de siembra de cultivos ilícitos ha colocado a una parte de la masa campesina en condiciones de ilegalidad y de confrontación con el Estado. Paradójicamente esta confrontación alimenta un tipo de conflicto de intereses estratégicos campesinos en los que el Estado, como contraprestación al proceso de erradicación, ofrece activar y financiar la titulación de tierras, créditos, facilidades de comunicación y comercialización de nuevos productos. Quienes han aceptado, de buena o mala gana, han impuesto condiciones tales como la no fumigación aérea de zonas aledañas a las viviendas y cumplimiento de las ofertas estatales. En más de una zona de cultivo se han suscitado paros y acciones de protesta, en lo que parece ser una reedición de movimientos realmente estratégicos para el campesinado y, a la vez, una forma adicional de combinación de luchas campesinas con estrategias guerrilleras. A manera de síntesis de la «cuestión campesina», dice Archila:

A pesar de la crisis organizativa actual, el campesinado sobrevive resistiéndose en condiciones difíciles a la creciente demanda de la propiedad agenciada por sectores terratenientes tradicionales y las nuevas mafias de la droga, a las duras condiciones estructurales de dificultad de acceso a los recursos productivos y a los efectos de la guerra sucia, entendida corno el asesinato de dirigentes populares y de izquierda por fuerzas inilitares o paramilitares

[11] Las cálculos más aproximados indican que a partir de 1985 cerca de 800.000 personas han sido desplazadas porla violencia rural y de pequeños pueblos. Cf. Nora Segura Escobar et al.: ***La mujer desplazada y la violencia***, Informe final de investigación presentado a la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, Bogotá, 3/1996.

desde la segunda mitad de los 80. Este último factor ha tenido especial incidencia en el campo, pues allí se han asentado diversos actores productores de violencia: las organizaciones guerrilleras, mafias de la droga, paramilitares y fuerzas armadas[12].

Los conflictos de los movimientos políticos extrapartidistas[13]. Igual que otras expresiones de «informalidad política», los conflictos de este orden vivieron momentos de auge en las dos décadas pasadas[14], mientras que la actual es testigo de su decaimiento. Los argumentos ya tradicionales de que los partidos constituyen comunidades imaginadas capaces de ofrecer ideologías totalizantes sobre el orden social y guiar conductas ciudadanas han perdido gran parte de su vigencia, y hoy día, por el contrario, se observa una fragmentación extrema que los han convertido en instituciones «de alquiler»[15]. Aun así, subsisten pugnacidades, especialmente en algunos municipios, que siguen, inclusive, produciendo asesinatos de partidarios.

Por otro lado, las expectativas que poco tiempo atrás generaron la Anapo, la Unión Patriótica, la AD-M19, hoy son definitivamente cosa del pasado, como lo son también las organizaciones de masas de algunos movimientos armados que surgieron cuando éstos optaron por dar algún peso a la acción no armada dentro de su estrategia de combinación de todas las formas de lucha. Han sido liquidadas por diversas circunstancias que incluyen los cambios de estrategia, el paso de la confrontación a la concertación, los errores de concepción, las entregas a prácticas tradicionales de clientelismo, los intercambios de favores, las disensiones internas, los abandonos ideológicos, las pujas por minucias, la negociación y la concertación, y por último pero lo más importante, la eliminación física de la mayoría de sus militantes en el proceso generalizado de la guerra sucia. Algunas estadísticas conocidas por las organizaciones gubernamentales y denunciadas en organismos internacionales señalan que en Colombia mueren hasta diez personas diarias al calor de las pugnas políticas.

Sin duda, las expresiones más importantes de esta tendencia al abandono de los patrones no tradicionales de afiliación y acción partidista se dan en los espacios locales, en los que estas prácticas tradicionales han sido confrontadas con alternativas de orden «movimientista» que en no pocos casos han derivado en fuertes conflictos[16]. En efecto, en las últimas elecciones para

---

[12] Archila, ob. cit., p. 268.

[13] Un examen de la situación reciente de los partidos políticos colombianos puede verse en Pierre Gilhodes: «Los partidos políticos, 1990-1995» en Leal (comp.): ***Eni busca...,*** ob. cit.

[14] Ver un amplio inventario de estos conflictos y movimientos en Gustavo Gallón (comp.): ***Entre movimientos y caudillos. 50 años de bipartidismo, izquierda y alternativas populares en Colombia,*** CINEP\CEREC, Bogotá, 1989. Sobre la noción de informalidad política, ver Alvaro Camacho Guizado: «Informalidad política, movimientos sociales y violencia» en ***Nueva Sociedad*** Nº 106, 3-4/1990.

[15] Ver el trabajo de Eduardo Pizarro en este Coloquio.

[16] Cf. Pilar Gaitán Pavía y Carlos Moreno Ospina: ***Poder local. Realidad y utopía de la descentralización en Colombia,*** Coediciones Tercer Mundo\IEPRI, 1990; también ***Política Colombiana***, Revista de la Contraloría General de la República vol. IV, 1944.

alcaldes locales los llamados «cívicos», entre los que se encontraban algunos sacerdotes, triunfaron en varias ciudades. Destaca, desde luego, el caso de Bogotá con el arrollador triunfo de Antanas Mockus.

En más de un municipio las coaliciones cívicas han derrotado a los partidos tradicionales, lo que ha llevado a éstos a transformar sus patrones de organización y retórica electoral, adquiriendo rótulos cívicos o, incluso, desatando procesos de eliminación física de los contendores. Aunque puedan parecer meros recursos tácticos, el hecho de que los partidos tradicionales o las organizaciones guerrilleras tengan que recurrir a estos métodos es indicativo de cambios en su capacidad para concitar lealtades y de las perspectivas de un electorado más independiente, crítico y negociador. En efecto, un rasgo típico de las nuevas figuras cívicas es que, además de tender a ser coaliciones de grupos con intereses de corto plazo, paralelos pero autónomos, se forman en torno de propuestas concretas de gobierno. Son entonces ideologías parciales que han sustituido a las ideologías generales de las viejas comunidades políticas imaginadas.

Los procesos de gestión e intermediación estatal han experimentado así cambios profundos. La transición del viejo caciquismo al clientelismo ha abierto la brecha para que penetre una nueva forma de mando, que consiste básicamente en que las ofertas electorales tienen que contar con respaldo real. El voto atado ha sido sustituido por el voto vendido, y el elector puede tomar decisiones sobre su precio. Es el nuevo imperio del ***do ut des*** clásico del clientelismo. La paradoja hoy día consiste en que una de las mayores trabas al desempeño gubernamental local no ha sido precisamente la incapacidad o deshonestidad de los mandatarios de «nuevo cuño» –aunque no han sido pocos los casos de corrupción o ineficiencia– sino el cúmulo de trámites y obstáculos que el Estado central interpone en el proceso de descentralización y manejo de los recursos financieros locales[17].

A lo anterior hay que agregar, sin embargo, otra fuente de presión a estos movimientos: muchos de ellos se encuentran en zonas de confrontación abierta entre el ejército, los paramilitares y las guerrillas. Como es de esperar, cada actor armado hace e impone sus exigencias, lo que coloca a los mandatarios en la incertidumbre y los hace perder las posibilidades de hacer efectivos los programas que los llevaron al poder.

El conflicto guerrillero[18]. Una de las mayores tragedias del movimiento guerrillero colombiano es que ha perdurado por tanto tiempo y ha enfrentado tantos obstáculos para acceder al poder por la vía militar, a pesar de su innegable crecimiento numérico, que su naturaleza puede tender a cambiar para dejar de ser un contendor global del Estado y las clases dominantes, un

[17] Camilo Villa Van Cothem: «Empresa importante busca..» en ***Política Colombiana,*** ob. cit.
[18] Sobre el movimiento guerrillero colombiano es fundamental consultar el libro de Eduardo Pizarro: ***Insurgencia sin revolución***, Coediciones IEPRI\Tercer Mundo, Bogotá, 1995.

peligro inminente, y convertirse en una comunidad armada con peso diferencial en lo local.

En efecto, el proceso de institucionalización de la guerrilla puede ser, paradójicamente, el peor enemigo de sus perspectivas históricas originales. Hay algunos indicadores de que los medios de fortalecimiento para la realización del cambio social radical se han convertido en fines. Los impuestos revolucionarios, las retenciones de personajes políticos para el envío de mensajes políticos y los ejercicios locales de autoridad, pueden fácilmente devenir en vacunas y exacciones, secuestros extorsivos y abusos de poder, y, lo que es peor, convertirse en formas de vida para esas comunidades armadas locales. Es decir, pueden realmente corresponder a la caracterización que de ellas ha hecho Marco Palacios al llamarlas clases políticas armadas subversivas[19].

Desde la perspectiva de la guerra, a la par con su crecimiento tanto en número de efectivos como en espacios territoriales, las guerrillas parecen haber llegado aun cierto acomodo en el cual renuncian al combate con el ejército y se concentran en el asedio a algunas grandes ciudades y la toma de poblaciones, en las que combaten con pequeños y precarios destacamentos de policía. En algunos casos castigan así los abusos de esa fuerza con la población, en otras cumplen rituales de «saludar» a nuevos comandantes de las Fuerzas Armadas, en otros cobran traiciones de algunas autoridades locales más afectas al ejército o a los destacamentos paramilitares locales; en fin, resuelven rencillas locales, al tiempo que amplían sus radios de influencia. No obstante, si hay algo que hoy día tiene que ser reconocido es que la existencia de las guerrillas no altera el curso de los desenvolvimientos institucionales, más allá del fortalecimiento presupuestal de las Fuerzas Armadas y la revelación de su proverbial ineficiencia. De hecho es notable que en medio de la mayor crisis política de la historia reciente de Colombia, el curso de los acontecimientos ha sido independiente de que haya o no guerrillas en el país.

La conversión en clases políticas armadas subversivas tiene otras consecuencias para el movimiento guerrillero. Al conflicto central que lo confronta con el Estado, el régimen político y el orden económico, y aun teniendo en cuenta las diferencias internas y de perspectivas entre los varios grupos, se asocian otros actores. De una parte, el narcotráfico, que se concreta en las zonas de presencia guerrillera de varias formas: en las relaciones con los campesinos productores, quienes no sólo deben pagar un impuesto especial, el «gramaje», sino que deben regular tanto los tamaños de sus cultivos como las relaciones que mantienen con los varios intermediarios en el negocio; los empresarios, quienes además de pagar el impuesto deben entrar en incómodas alianzas exigidas por las necesidades de protección contra los aparatos del Estado encargados de la erradicación de cultivos. Se trata de un

[19] Palacios, ob. cit., p. 347.

caso claro de relaciones sociales profundamente contradictorias, pues mientras las guerrillas existen para combatir el orden económico, estos empresarios son los portadores de las formas más salvajes del capitalismo.

Y cuando no se trata de empresas ilícitas, sino de industrias legales, como la minería, la ganadería o las actividades petroleras, las alianzas se traducen en que la guerrilla, como «socia», vigilante o agente fiscal, patrocina las formas de explotación y expoliación laboral propias de esas empresas. En ambos casos las alianzas harían ruborizar a luchadores por la democracia económica.

Otro actor asociado al movimiento guerrillero es la delincuencia organizada, que manifiesta su participación con alianzas expresadas en los constantes intercambios de secuestrados. Varios de estos casos han sido documentados. Más aún, en algunas de sus versiones urbanas, las milicias han tejido con delincuentes locales redes de relaciones contradictorias: justifican la delincuencia a partir de la pobreza y la marginalidad urbana, a la vez que tienden a actuar como «vigilantes» y protectores de la comunidad contra esos mismos delincuentes. El parentesco con el sicariato y las autodefensas no se puede ocultar.

Finalmente, el proceso de desmantelamiento de sus frentes de masas. Hoy día «A luchar» (del ELN), el Frente Popular (del EPL), la Unión Patriótica (de las FARC) y otras organizaciones de ese cuño prácticamente no existen. Por el contrario, la estrategia actual parece concentrarse en la organización de milicias urbanas que no constituyen guerrillas urbanas y que actúan ante todo como reservas y apoyos estratégicos y logísticos. En otras palabras, la política desarmada, la agitación y la organización popular no son métodos favoritos de esas organizaciones militares. Una consecuencia inevitable de estas relaciones y estrategias ha sido el reciente cierre de las posibilidades de reconocimiento de que detrás de los conflictos militares están larvados los conflictos sociales, que podrían tener trámites democráticos, participativos e incruentos.

Los conflictos por intereses cívicos generales. Los paros cívicos, los movimientos regionales y las protestas ciudadanas de las dos décadas anteriores tuvieron una enorme magnitud: en los 80 la protesta cívica tiene un ascenso vertical. Entre 1958 y 1966 se realizaron 16 paros cívicos. Durante los diez años siguientes, 1971 a 198 1, se realizaron 13 8, más de 13 por año en promedio. De ellos, dos fueron nacionales, el de 1977 y el de 1981. De 1982 a junio de 1989 hubo 218, más de 30 por año. En el curso de apenas siete años se llevaron a cabo 80 paros cívicos más que en toda la década anterior[20]. No hay que olvidar que estos conflictos que cubrieron a más de medio país se gestaron cuando en Europa oriental se derrumbaba el comunismo existente y la clase obrera dejaba de ser el faro luminoso que alumbraba el porvenir. En estas condiciones, más de un analista se entusiasmó con ellos al punto de creer que

[20] Luis Alberto Restrepo: «Movimientos cívicos en la década de los ochenta» en Leal y Zamosc (eds.): Al filo..., ob. cit. Ver también Archila, ob. cit.

había surgido en el país un nuevo actor social, «la sociedad civil popular», que sustituiría a las clases obrera y campesina y a sus organizaciones como el nuevo representante de los intereses cívicos generales, o, lo que es más serio, la voluntad del pueblo.

Hoy quedan de ellos recuerdos. Los paros nacionales, las grandes marchas obreras y campesinas, los paros regionales de Oriente y Occidente, terminaron con muertes, represión y contadas conquistas. Sus bases y justificaciones sin duda siguen en pie: la precariedad de los servicios públicos, los desequilibrios regionales y el acelerado crecimiento urbano, las políticas sociales de recorte de algunas conquistas y las violaciones de los derechos humanos. En estas condiciones, ¿qué hay detrás de su crecimiento, auge y decaimiento? Luis Alberto Restrepo sintetiza así su punto de vista:

> ... en los años 80 se produce una notable proliferación de organizaciones de base independientes, y en particular, se fortalece el movimiento cívico. Su característica más notable es la independencia inicial frente a todos los partidos y a las guerrillas. Este fenómeno significa una ruptura histórica frente a la dependencia consagrada desde 1936 y es la fuente real de su nueva unidad y fortaleza. Pero este ascenso es interferido desde 1984 por la penetración de algunas organizaciones sumidas en crisis ideológica y política que, sin haberla resuelto, buscan en ellos su lugar de reproducción cuantitativa. La interferencia parece estar conduciendo a la desarticulación y parálisis de las organizaciones de base y de los movimientos sociales surgidos a comienzos de la década. Estos se han ido viendo afectados, además, por el deterioro ético del país, al que tanto ha contribuido el tráfico de droga. Finalmente, la represión y la guerra sucia han tenido también un significativo impacto desmovilizador.[21]

Los conflictos coyunturales

Los conflictos del narcotráfico. La literatura sobre el tema abunda en Colombia[22], y justamente en estos días de crisis del régimen político ha adquirido su verdadera relevancia. A manera de síntesis se puede decir que el narcotráfico dejó de ser una práctica ilegal de un grupo de delincuentes exportadores de drogas prohibidas para convertirse en un problema nacional y en un asunto de Estado. Incidió seriamente en la conformación de las clases sociales, en la distribución de la propiedad rural, en la potenciación de la violencia, en la configuración de las elites y en la transformación de valores tradicionales. Generalizó así situaciones de conflicto inminente en la vida nacional.

La penetración del narcotráfico en todas las órbitas de la vida institucional y muy especialmente en la política, y dentro de ésta en los más altos niveles de la

[21] Ibíd., pp. 408-409.
[22] Alvaro Camacho Guizado: «Narcotráfico y sociedad en Colombia: contribución a un estudio sobre el estado del arte» en ***Boletín socioeconómico*** Nº 24-25, Cidse-Universidad del Valle, Cali, 8-12/1992; Francisco Thaumi: ***Economía política y narcotráfico,*** Tercer Mundo Editores, Bogotá, 1994.

representación nacional, desorganizó más aún a los partidos políticos, exacerbó la corrupción, dividió a la opinión pública respecto de la legitimidad de sus gobernantes y lo convirtió no sólo en un actor político de primer orden, sino en un eje de determinación de la conducción del Estado. Se despejó la ilusión de que el control al narcoterrorismo solucionaría las tensiones frente al gobierno de Estados Unidos, y mostró que, lejos de ello, la potencia continental no se contentaría con menos de una verdadera práctica de erradicación de todo el negocio. A los conflictos internos, pues, agregó uno internacional cuya solución escapa al control de la dirigencia nacional.

En síntesis, colocó al país en la peor de sus situaciones para el ejercicio de la actividad y la dominación política –lo que hoy se trata con el neologismo de ***gobernabilidad–*** y mostró la fragilidad de las instituciones más directamente ligadas a la democracia representativa. El desenlace del actual callejón sin salida pasa por la solución del más álgido de los problemas que enfrenta Colombia en las últimas décadas.

Los conflictos de los derechos humanos. Anteriormente señalé cómo una de las fuentes de movilización y gestación de conflictos ha sido la política estatal respecto de los derechos humanos. Sin embargo, los informes que desde 1991 viene publicando la Procuraduría General de la Nación muestran que la situación está muy lejos de mejorar. La aprobación del Protocolo II de Ginebra tuvo que recorrer un largo y tortuoso camino antes de convertirse en legislación nacional, y la oposición más sistemática y virulenta provino del Ejército. Su vigencia hoy día no necesariamente es indicativa de una reorientación política del gobierno, sino de la fuerza de las presiones internacionales. En este campo varios actores internacionales han sido claves para incidir en este conflicto mayor.

Cuando algunos representantes del gobierno colombiano han intentado conseguir apoyos internacionales en su larga pugna con EEUU, han encontrado, en especial entre algunos gobernantes europeos, una respuesta ambigua: por un lado, una cierta simpatía por el hecho de que Colombia es atropellada por una potencia; por otro, un reclamo inequívoco acerca de la sistemática violación de los derechos humanos en el país.

Colombia ha recibido amenazas de sanciones por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y en el seno de las Naciones Unidas se ha contemplado en más de una ocasión la posibilidad de enviar un relator, lo que en la práctica significa protección para las víctimas, pero un evidente castigo al gobierno. Más aún, en el senado de EEUU el caso colombiano ha sido discutido en toda su dimensión, y en este terreno también se pueden esperar sanciones.

No sólo las instituciones internacionales y los Estados, sino que muchas organizaciones no gubernamentales europeas y estadounidenses han elevado

continuamente sus voces de protesta contra la situación. En los primeros días de su gobierno, el presidente Samper reconoció el hecho, y antes de recibir una sanción de la Corte Interamericana, decidió prohijar una investigación sobre la masacre de Trujillo. A pesar de que los resultados fueron ampliamente condenatorios para el gobierno, la política estatal no se ha modificado de manera sensible y clara.

El Insistente argumento estatal de que las violaciones se producen en el marco del conflicto armado y que los principales violadores de los derechos humanos son las guerrillas, no ha logrado reducir el conflicto entre el gobierno y los interlocutores internacionales. Aun cuando en la doctrina al respecto se abre paso la noción de que los agentes portadores de poder –sean Estado o no– son violadores, el hecho central de que el único responsable internacional es el Estado pesa sobre las alegaciones del colombiano[23].

Si bien es cierto que el conflicto armado puede estar en la base de muchas de las violaciones, no lo es menos que la gestión estatal en otros campos también ha sido objeto de condena. Las violaciones por parte de la Policía Nacional en su trato con la población urbana constituye un amplio repertorio de abusos y brutalidad. De hecho, ya ha sido reconocido por las propias autoridades de ese cuerpo armado que la corrupción y los desmanes han sido carta corriente. Según datos de la propia institución, más de 7.000 miembros de la PN han sido destituidos.

Los conflictos de identidades

Estos conflictos han tenido desarrollos muy desiguales: desde aquellos que han logrado sus reivindicaciones, así fueran parciales, con un alto costo de vidas humanas, como el indígena, hasta los que han venido ganando terreno de una manera lenta pero inexorable y que no se han traducido en verdaderas confrontaciones, como el feminista.

Los conflictos étnicos. A pesar de que según algunos expertos la legislación indígena colombiana es una de las más avanzadas del mundo[24], en varios de los movimientos indígenas[25] se mezclan su naturaleza de movimientos sociales que reivindican identidades culturales e historias propias con luchas por recursos. Enfrentados históricamente a despojos, expoliaciones y servidumbres, han combinado varias formas de lucha, desde las invasiones de

[23] Elena Manitzas y Fernando Rojas: «Elementos para una gestión estratégica de los derechos humanos en Colombia, (Análisis del periodo 1994-1995, Administración Samper)», FESCOL (multicopiado), Bogotá, 12/1995.
[24] Christian Gros: Colombia indígena. Identidad cultural y cambio social, Bogotá, CEREC, 1991.
[25] Sobre los movimientos y conflictos indígenas en el país, se deben consultar los trabajos de la Comisión de estudios sobre la violencia: ***Colombia: violencia y democracia,*** Universidad Nacional, Bogotá, 1987; María Teresa Findji y José María Rojas: ***Territorio, economía y sociedad,*** Cidse-Universidad del Valle, Cali, 1985; Gros: ob. cit.

tierras hasta la organización de un grupo guerrillero «societal»[26], el Quintín Lame, en zonas del Cauca. Otros, como los arhuacos, kogis y arzarios de la Sierra Nevada, no recurren a las maniobras militares, y sacan su fuerza de la movilización de recursos estrictamente culturales para afirmarse como etnias, como «hermanos mayores», y así concitar apoyos externos para su defensa. Otros son víctimas indiscriminadas de la acción conjunta del Ejército, los paramilitares y las guerrillas; tal es el caso de los zenúes de Córdoba. Y otros, en fin, como los habitantes de la Amazonía y Orinoquia, siguen siendo presas de los procesos de expansión de la frontera agrícola y de la extensión de cultivos ilícitos que, si bien pueden aportarles algún ingreso adicional en el corto plazo, los enfrentan con el Estado como delincuentes, introducen una economía monetaria y alteran sus arreglos culturales tradicionales.

Aunque la naturaleza de los conflictos que caracteriza a la población negra colombiana es bastante diferente de la que signa a los indígenas, las poblaciones de color pasan hoy día por una escena conflictiva que sin dudase expresará en poco tiempo. Más allá de la tradicional discriminación que los ha colocado en los sitiales más bajos en la escalas de estratificación, los conatos recientes de exigencias de respeto y reconocimiento y las incipientes luchas territoriales, tienden a convertir a la población negra en un actor social de creciente importancia[27]. Aunque sus procesos organizativos son mucho más incipientes que los de los indígenas y están atravesados por mayores dificultades históricas, políticas y culturales, algunas organizaciones tratan de adquirir fuerza e identidad.

Ciertas dificultades históricas se expresan en las viejas lealtades con el Partido Liberal, que con el general José Hilario López a la cabeza promulgó la legislación de manumisión. El que no hayan desarrollado organizaciones políticas propias, y sí generado elites políticas locales que han seguido patrones tradicionales de corrupción y clientelismo, en departamentos como el Chocó, tampoco juega en su favor. Y el que no logren una identidad nacional –contra la que juega su dispersión en polos geográficos distantes– se une a lo anterior para explicar las dificultades para gestar un movimiento que permita confrontar el conflicto mayor: la creciente pérdida de tierras a manos de terratenientes invasores y de colonos que los desplazan a las marginalidades de sus territorios o a los cinturones de miseria de ciudades como Cali, Cartagena o Barranquilla, epicentros de los polos geográficos mencionados. Y estas dificultades subsisten a pesar de que cuentan con una legislación que les es favorable.

---

[26] Cf. Pizarro: ob. cit., pp. 56, ss.

[27] Gustavo de Roux: «Orígenes y expresiones de una ideología liberal» en ***Boletín socioeconómico*** Nº 22, Cidse-Universidad del Valle, Cali, 7/1991; Comisión de estudios sobre la violencia: ***Colombia...*** ob. cit.; Nina S. de Friedemann y Jaime Arocha: ***De sol a sol, génesis, tranlformacíón y presencia de los negros en Colombia,*** Planeta, Bogotá, 1986.

Los conflictos de género. A pesar de que las generalizaciones en este campo son especialmente complicadas, se podría intentar una síntesis muy breve de las principales características que los movimientos de mujeres han tendido a asumir en nuestros días. Es claro que, como cualquier movimiento que tiene como meta transformaciones bastante profundas en una estructura social y en unos arreglos culturales, el movimiento feminista ha sido desigual.

En primer lugar, el movimiento que históricamente dio inicio a las reivindicaciones sociales de las mujeres fue de orden socioeconómico, y se centró muy especialmente en torno de reclamos asociados con la participación política y la igualdad de ingresos y oportunidades laborales. La expansión del aparato educativo y el descendente equilibrio demográfico han sido poderosos auxiliares de su desarrollo, puesto que se han acompañado de crecimiento y diversificación del empleo capitalista propios de la modernización de nuestra economía en las últimas décadas. Sin embargo, estos mismos fenómenos han suscitado una diferenciación socioeconómica y cultural de las mujeres en laque aquellas pertenecientes a estratos altos y medios han experimentado los mejores avances, en tanto que los estratos bajos siguen mostrando atrasos considerables. Aunque en teoría las conquistas existen objetivamente y la mujer colombiana ya está cerca de lograr igualdad jurídica, su situación real dista mucho de ello.

En segundo lugar, una expresión más reciente ha estado asociada con reivindicaciones de orden cultural, en las que el componente de género ocupa un lugar central. Los derechos a la sexualidad, al manejo libre y autónomo del cuerpo, vienen acompañados de una cosmovisión nueva e incipiente en la que la transformación cultural de hombres y mujeres se erige como meta de realización. En este campo los desarrollos son lógicamente más débiles, y aún persisten muchas estructuras socioculturales y económicas que atentan contra este principio[28].

En tercer lugar, la mujer ha desempeñado un papel central en los conflictos asociados con los derechos humanos y la violencia. Víctimas directas de los desplazamientos forzosos[29], los asesinatos y desapariciones de familiares, las mujeres colombianas han estado a la vanguardia en el rechazo de las prácticas violentas y atentatorias de los derechos humanos, hechos en contra de los que han levantado protestas y han enfrentado al Estado y sus organismos armados a través de marchas multitudinarias.

Sin duda, hoy día los movimientos de las mujeres colombianas han sido los principales instrumentos en la construcción de la poca pero creciente conciencia nacional en torno de la violencia de los conflictos de lo íntimo y lo familiar, que produce un número considerablemente mayor de víctimas de

[28] Nora Segura Escobar: «Mujer y sociedad: estudios, balances y perspectivas» en ***Boletín Socioeconómico*** Nº 24-24, Cidse-Universidad del Valle, Cali, 8-12/1992.
[29] Cf`. Nora Segura Escobar et. al.: ***La mujer desplazada....*** ob. cit.

homicidios, lesiones, abandonos y toda suerte de vejaciones que cualquier otra clase de violencias.

Los conflictos de la juventud pobre. El solo hecho de que los jóvenes entre 14 y 24 años den cuenta de la inmensa mayoría de los victimarios y víctimas de homicidios en el país, debe hacernos abrir los ojos ante el tamaño de un conflicto que n o por larvado es menos grave[30].

En ese terreno Colombia está en una situación «pre-1968», el año en que las reivindicaciones de identidades e intereses juveniles en el mundo entero llegaron a su clímax. Este movimiento generó el carácter de subcultura de la juventud, abrió espacio de expresión y realización propia e independizó a los jóvenes de las imposiciones de las orientaciones culturales de los más viejos.

Los jóvenes colombianos no han escapado a estas influencias y determinaciones mundiales. Lo que se expresó en la década de los 70 a través del ardor político revolucionario, en los 90 se ha venido manifestando, especialmente entre la juventud pobre, en prácticas de búsqueda de una identidad propia. La música alternativa importada de EEUU en sus versiones de ***funk, rap y*** manifestaciones como el «pogo» son evidencias de esta tendencia. Uno de los fenómenos que más ha llamado la atención de quienes se interesan por esta situación es el casi inevitable estereotipo entre bailarín de estos tipos de música y delincuente. El estigma ha llegado a ese punto de exageración.

Receptores de una violencia que signó las vidas de sus padres, carentes de oportunidades de realización por las vías de la educación o el empleo, privados de espacios de expresión propia, los jóvenes pobres han oscilado entre la búsqueda de formas culturales que se manifiestan en «parches» y pandillas extraños y amenazantes para los demás y la violencia de la que han sido actores como sicarios o delincuentes por cuenta propia[31].

Jóvenes pobres bogotanos entrevistados en Bogotá expresaron de manera inequívoca estos puntos: aunque reconocen el valor que representa la educación formal, rechazan los patrones institucionales de la escuela: el encierro, las tareas, el autoritarismo de los maestros, la excesiva reglamentación, la ausencia de saberes prácticos y la dosificación arbitraría de

---

[30] Ana María Arbeláez e Ignacio Bustos: ***La vida es una sola. Una experiencia juvenil de construcción de paz en Ciudad Bolívar***, Alcaldía Mayor-Unidad Coordinadora de Prevención Integral, Bogotá, 1995; Amparo Ardila, Javier Pombo y Rubén Darío Puerto: ***Pandillas juveniles. Una historia de amor y desamor,*** Secretaría Distrital de Educación/FES, Bogotá, s/f.

[31] Es muy interesante hacer el contraste entre la cosmovisión de los jóvenes medellinenses que entrevistó Alonso Salazar y las inquietudes artísticas que detectó en Ciudad Bolívar(Bogotá) Arturo Alape. Cf. ***No nacimos pa'semilla,*** Cinep, Bogotá, 1990; Arturo Alape: ***Ciudad Bolívar. La hoguera de las ilusiones***, Planeta, Bogotá, 1995; Rodrigo Parra: ***Ausencia de futuro. La juventud colombiana,*** Plaza y Janés, Bogotá, 1982; Rodrigo Parra, Adela González, Olga Patricia Moritz, Amilvia Blandón, Rubén Bustamante: ***La escuela violenta,*** FES/Tercer Mundo, Bogotá, 1992.

los conocimientos[32]. Respecto del trabajo resaltaron las diferencias entre la gratificación pecuniaria inmediata que aporta la delincuencia y la pospuesta por la educación formal clásica o el trabajo descalificado en la «rusa» (industria de la construcción). La estructura de las oportunidades, las bajas probabilidades de recibir castigos por la ilegalidad, la tendencia al machismo y las presiones y tentaciones del consumo actúancomo resortes que los alejan de lospatrones de vida que los adultos esperarían de ellos[33].

Los micro-conflictos. Las rencillas que enfrentan a conductores de vehículos y que terminan en lesiones y muertes, las riñas al calor del alcohol, los maltratos familiares[34], las desavenencias entre vecinos, son manifestaciones de estructuras conflictivas en la vida cotidiana y que no construyen actores sociales en el sentido más lato de la palabra.

Algunos estudios hechos a partir de las necropsias y reconocimientos del Instituto de Medicina Legal muestran que la gran mayoría de las lesiones y los homicidios se producen en fines de semana, que un porcentaje elevado de las denuncias por lesiones se reiteran una y otra vez, que un número alto de cadáveres tiene grados elevados de alcoholemia, que las muertes se producen a corta distancia cuando se trata de armas de fuego, que éstas son de calibres pequeños, y que en un número apreciable de casos las víctimas y los victimarios eran conocidos[35].

Esta fenomenología de la muerte indica una situación de conflicto larvado permanente que se materializa en cualquier momento y bajo circunstancias que en una gran medida son toleradas o estimuladas por el Estado: otra cosa no se puede esperar cuando jerarcas militares inducen y legitiman el armamentismo privado, cuando se satura a la gente de publicidad oficial de bebidas alcohólicas monopolizadas por el Estado, cuando se carece de sistemas institucionales de conciliación y prevención, cuando las políticas de seguridad ciudadanas privilegian las medidas policiales y judiciales y se preocupan más por defender las instituciones que a los ciudadanos, o cuando los sistemas de planeación urbana no contemplan medidas conducentes a establecer usos adecuados de los espacios públicos.

Una tentativa de balance

[32] Ardila, Pombo et. al.: ob. cit.
[33] Arbeláez et al.: ob. cit.
[34] María Cristina Maldonado: ***Conflicto, poder y violencia en la familia,*** Editorial Facultad de Humanidades, Universidad del Valle, Cali, 1995.
[35] Héctor Iván García y Carlos Horacio Vélez: ***Caracterización de la muerte violenta por homicidio en Medellín en la década de los ochenta,*** Facultad Nacional de Salud Pública, Medellín, 1992; Alvaro Camacho Guizado y Alvaro Guzmán Barney: ***Ciudad y violencia,*** Ediciones Foro Nacional, Bogotá, 1990; Alcaldía Mayor de Bogotá: ***Boletín de violencia y delincuencia,*** (varios números), Bogotá, 1995-96; Alvaro Guzmán Barney: ***Diagnóstico sobre la violencia homicida en Cali durante 1993*** (Documento de trabajo), Cidse, Cali, 1993.

En esta sección trataré de ensayar algunas reflexiones acerca de la dinámica general de los conflictos colombianos, y para ello plantearé algunas hipótesis para la discusión. Sin embargo, querría hacer unos comentarios preliminares. Antes, recordemos cómo se planteó Estanislao Zuleta el tema y la política de los conflictos:

> Si alguien me objetara que el reconocimiento previo de los conflictos y las diferencias, de su inevitabilidad y su conveniencia, arriesgaría a paralizar en nosotros la decisión y el entusiasmo en la lucha por una sociedad más justa, organizada y racional, yo le replicaría que para mí una sociedad mejor es una sociedad capaz de tener mejores conflictos, de reconocerlos y de contenerlos. De vivir, no a pesar de ellos, sino productiva e inteligentemente en ellos. Que sólo un pueblo escéptico sobre la fiesta de la guerra, maduro para el conflicto, es un pueblo maduro para la paz.[36]

Un componente de esa madurez es la construcción de mecanismos sociales y legales de tramitación y concertación de contradicciones y pugnacidades que permiten que no haya necesariamente vencedores y vencidos, y que los contendores puedan convertirse en competidores. La ausencia de estas mediaciones es una de las claves que nos permiten comprender por qué en Colombia se presenta tal cúmulo de dificultades de tramitación de conflictos y por qué a la vez éstos tienden a rebasar sus ámbitos específicos y a expresarse de maneras cruentas y fuera de control.

Que el conflicto es productor de sociedad y fortalecedor de identidades es algo que ya Georg Simmel estableció brillantemente[37]. Sin embargo, el intento de acallarlo, bien sea en nombre de una utópica armonía social o de la intolerancia propia de la búsqueda de supremacía de uno sobre otro, hace que los campos de confrontación se desplacen de sus cursos normales a la eliminación de las diferencias o, lo que es peor, a la eliminación del otro. Del examen de nuestros principales conflictos se podría deducir que si algo nos caracteriza como sociedad es nuestra incapacidad de tramitarlos, es decir, de vivirlos dentro de los marcos del reconocimiento de las contrapartes. Se dibuja así nuestra tendencia a convertir los conflictos sociales en confrontaciones violentas.

El supuesto central que ha dirigido mi indagación se podría resumir en pocas palabras: así como las contradicciones sociales no necesariamente se resuelven (y ¿qué quiere decir, al fin y al cabo, que se resuelven?, ¿por qué tienen que resolverse?), así mismo los conflictos pueden subsistir de largo, ***rutinizarse,*** desplazarse o cambiar las formas de relación entre los opositores.

El principio del desplazamiento. Aunque están lejos de resolverse, los conflictos obrero y campesino, el de los movimientos políticos y los cívicos, han pasado, y continúan pasando, por fases diferentes: el proceso de ***rutinización***

---

[36] Estanislao Zuleta: «Sobre la guerra» en ***Colombia: violencia, democracia y derechos humanos,*** Ediciones Altimir, Bogotá, 199 1, p. 111.

[37] Georg Simmel: «Conflict» en ***Conflict and the Web of Group Affiliations,*** The Free Press, New York, 1955.

ha sido evidente y, más que ello, se han ritualizado. Uno de los mecanismos más eficaces y habituales en esta dirección es la cooptación de las dirigencias obreras a través de mejoramientos parciales, ofertas selectivas, halagos y manipulaciones. Se condensa así un proceso por el cual, en la medida en que cada fracción sindical puede considerar que ha mejorado su situación y al mismo tiempo puede construir sus propias formas de exclusión de otros más bajos, se evita la polarización y la confrontación.

Por otra parte, la tendencia a su desplazamiento y conversión en conflictos violentos ha significado el desborde de los intereses iniciales hacia otros ligados a la confrontación más general y que tiene que ver con el orden social en su conjunto. Los saldos netos son el aplazamiento de las reivindicaciones que los suscitaron, la ilegalización, militarización y desbordamiento hacia opciones violentas en las que los actores originales quedan convertidos en víctimas de los excesos de lado y lado.

Los conflictos por identidades han corrido con suertes diferentes. Aunque el de los indígenas es un conflicto que ha pasado por la fase de desplazamiento hacia la violencia, hoy día pareciera que las conquistas constitucionales y políticas se han traducido en procesos de concertación parlamentaria en la que si bien algunos indígenas –los más organizados políticamente al menos– han ganado terreno en su exigencia de legitimidad, y con ello han reducido las amenazas y la violencia que se enseñoreaba en sus reivindicaciones, al mismo tiempo pueden estar transformando la acción de masas en un proceso de encierro, burocratización y ritualización de la protesta.

Más allá de que el movimiento feminista no ha suscitado violencia, las mujeres de más bajos ingresos continúan siendo las víctimas más sobresalientes de la violencia doméstica y familiar, y no porque exijan reivindicaciones de género, sino justamente porque el movimiento no ha logrado penetrar con sus demandas en esos sectores. En este sentido la diferenciación clasista es inocultable.

Sin duda el conflicto de identidades más serio y con menos posibilidades de tramitación concertada es el de la juventud pobre. A diferencia de las mujeres, sus características y formas de expresión, sus profundos desplazamientos, crean dificultades adicionales a la posibilidad de encontrar vías no violentas de tramitación. En efecto, algunos rasgos que lo acompañan, como el consumo de droga, las asociaciones con la delincuencia y el carácter errático de las reivindicaciones, crean barreras a su legitimación. La ecuación joven pobre = violencia, desdibuja el carácter de lo joven y pone el de lo antisocial a presidir el conflicto. Los actores que podrían mediar –padres, maestros, orientadores, trabajadores sociales– son recientemente sustituidos por jueces y policías.

Las opciones de los dominados. El segundo supuesto se podría resumir así: sólo excepcionalmente los dominados en un conflicto cuentan con los recursos

necesarios para resolverlos a su favor. En efecto, las posibilidades, formas e impacto de las luchas están limitadas y moldeadas por una estructura social cuyo papel central es limitar su extensión y fuerza. Al fin y al cabo las oportunidades para retarla son organizadas por la vida institucional, y la gente no puede desafiar a aquellas instituciones en las cuales no tiene acceso o posibilidad de participación[38].

En su estudio de la política de la década de los 20 en Alemania, Barrington Moore examinó la noción de alternativas históricas suprimidas para explicar las opciones que confrontaba la socialdemocracia alemana frente a la doble amenaza del comunismo y el fascismo. Apoyar al primero era un suicidio, y de allí las ambivalencias que finalmente la llevaron a su derrota[39]. Pues bien, un argumento similar se puede hacer frente a los movimientos de intereses estratégicos clasistas. En la medida en que se encuentran sumidos entre los fuegos de los aparatos armados, y que sus reivindicaciones en más de una forma son expropiadas por los mismos, sus opciones, sus alternativas históricas se reducen a establecer balances entre las fuerzas que los presionan. Se desplazan así los intereses y los actores centrales se convierten en una especie de comodines en la confrontación mayor.

Pero si con ellos ocurre esto, las alternativas históricas de la guerrilla se ajustan más precisamente a ese principio. En concreto, pareciera que mientras su crecimiento numérico y su base territorial se amplían, sus perspectivas de triunfo político no crecen con la misma intensidad. De hecho, y a pesar de las diferentes orientaciones de los grupos, es notorio cómo las metas originales tienden a ser de menor envergadura: de la aspiración a la toma del poder central del Estado para realizar desde allí la transformación del modo de producción, han pasado a procesos de control de poderes locales, en los que el ejercicio de la dominación las convierte, como se dijo arriba, en clases dominantes armadas locales.

Finalmente, algunos comentarios sobre los que he llamado micro-conflictos. Por carecer de actores diferenciables, por no enfrentar colectividades, configuran un fenómeno especial que signa a nuestra sociedad y en particular a las ciudades. Productos del caótico crecimiento urbano, acompañan el creciente desarrollo de lo que podríamos llamar lógicas de ventaja frente a lógicas de responsabilidad, y que resultan de que la cultura urbana no se acompaña de cultura ciudadana[40], y que en últimas se traducen en ejercicios ubicuos de poderes en los que los más débiles llevan las de perder. Cualquier normatividad diseñada para aminorar las desiguáldades en derechos resulta inane frente al ejercicio de la razón de los poderosos.

---

[38] Frances Fox Piven y Richard A. Cloward: ***Poor People's Movements. Why they Succeed and How Thev Fail***, Random House, New York, 1979; de los mismos autores, ***The Politics*** of ***Turmoil. Poverty, Race and the Urban Crisis***, Random House, New York, 1975.

[39] Barrington Moore Jr.: ob. cit.

[40] Alvaro Camacho: «Ciudades sin ciudadano» en ***Lecturas Dominicales. El Tiempo***, 2/7/1996.

Por esto los micro-conflictos reflejan el clima de intolerancia generalizada y su ausencia de mecanismos sociales y de tramitación de conflictos y desavenencias menores. No responden a intereses estructurales de las partes, ni a las exigencias de respeto y reconocimiento de identidades sociales. Es un síntoma particular de lo que Wright Mills llamaría «un gran malestar»[41].

[41] C. W. Mills: ***La Imaginación sociológica,*** Fondo de Cultura Económica, México, 1961.